

Santiago, doce de octubre de dos mil veintiuno.

**Vistos:**

En autos Rit T-171-2018, Ruc 1840012380-2, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, caratulados "Burdiles con JUNJI", por sentencia de dos de enero de dos mil diecinueve, se desestimó la demanda de tutela de derecho fundamentales con ocasión del despido, dando lugar a la demanda subsidiaria de declaración de existencia de relación laboral, despido injustificado y cobro de prestaciones deducida por doña Jacqueline Gloria Burdiles Espinoza en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, declarando la existencia entre las parte de un vínculo laboral entre el 1 de septiembre de 2014 y el 13 de junio de 2018, condenando a la demanda a las indemnizaciones derivadas de la declaración de injustificación del despido, recargo legal del artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, y a las cotizaciones de seguridad durante el tiempo en que se extendió la relación laboral, ordenando oficiar a los organismos correspondientes. Asimismo, se desestimó la demanda de nulidad de despido.

Ambas partes dedujeron, en contra de dicho fallo, recurso de nulidad. El Fisco de Chile lo fundó, en lo que interesa, en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República; artículo 2 de la Ley N° 19.880; artículos 4 inciso segundo y 9 inciso tercero del Decreto Ley N° 1263 y artículo 58 del Código del Trabajo, y la Corte de Apelaciones de Temuco, por decisión de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, los rechazó.

Respecto de dicha decisión la demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, que pasa analizarse.

Se ordenó traer estos autos a relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.



**Segundo:** Que la materia de derecho objeto del juicio que el recurrente solicita unificar, consiste en la procedencia del pago de cotizaciones previsionales y de salud, en aquellos casos en que la sentencia definitiva declare la existencia de una relación laboral entre una persona que se vinculó con el Fisco mediante la celebración de contratos a honorarios, sosteniendo, en síntesis, que yerra la Corte de Apelaciones de Temuco al condenar a la demandada al pago de las cotizaciones de salud y previsionales durante el tiempo en que se extendió el vínculo de trabajo, pues al haberse vinculado las partes en virtud de sendos contratos a honorarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.834, el Fisco se encontraba imposibilitado de retener el dinero para proceder su pago, atendidos los principios de legalidad competencial y legalidad del gasto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 100 de la Constitución Política de la República y artículos 4 inciso segundo y 9 inciso tercero del Decreto Ley N° 1.263, acompañando como contraste las sentencias dictadas por la Corte de apelaciones de Santiago y Temuco, en los autos Roles N° 2.530-2018 y 398-2018, respectivamente.

**Tercero:** Que la decisión impugnada resolvió la controversia argumentando, en lo que interesa, que *“...el sentenciador determinó que esta relación no se encuadraba en lo prevenido en dicho artículo (artículo 11 del Estatuto Administrativo) y que la relación tenía un carácter de laboral, cuestiones que no son discutidas en lo que respeta a esta causal. Bajo ese prisma, era responsabilidad del Fisco, como empleador, retener los fondos para el pago de las cotizaciones previsionales del trabajador”*

Continuó señalando que *“...las normas que estima infringidas regulan las formalidades que el órgano central debe cumplir para efectos de hacer desembolsos patrimoniales...no pueden ser interpretadas de forma tal que priven a un trabajador de las cotizaciones previsionales a las que tiene derecho, dejándole en desmedro de los demás trabajadores.*

*...Por otra parte, al tener la sentencia el carácter de declarativa, lo que hace es reconocer una situación de derecho que existía desde que ella la fija, es decir, reconoce la relación laboral desde la fecha en que el demandante empezó a trabajar, por lo que si no se cumplieron a su respecto todas las obligaciones del empleador, entre ellas pagar las cotizaciones previsionales y de salud, éstas tal como lo sostiene el fallo, se adeudan”.*



Finalmente, concluyó que, tal ha sostenido esta Corte, que si bien es un criterio asentado que la vinculación a honorarios, tratándose de órganos de la administración del Estado, si bien les otorgaba, en principio, una presunción de legalidad que descarta la sanción de nulidad de despido, *“...lo anterior no altera la obligación de enterar las cotizaciones previsionales adeudadas por el periodo en que se reconoció la existencia de la relación laboral”*.

**Cuarto:** Que las sentencias acompañadas para la comparación, Roles N° 2.530-2018 y 398-2018, de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Temuco respectivamente, exponen una tesis jurídica distinta a la impugnada, pues se pronuncian en contra del pago de las cotizaciones de salud y previsionales en casos homologables al de marras, constatando la existencia de pronunciamientos diversos emanados de Tribunales Superiores de Justicia respecto de las materias de derecho debatidas, por lo que procede unificar jurisprudencia, conforme el criterio que esta Corte estima correspondiente.

En dicho contexto, cabe señalar que, tal como ha sido resuelto por esta Corte en reiteradas oportunidades (Roles N° 42.973-2017, 22.382-2019, 10621-2019 y últimamente en el Rol N° 29164-2019), el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: *“El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...”*.

Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la seguridad social es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, al indicar: *“Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...”*.

Además, el mismo cuerpo legal al establecer el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula: *“Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...”*. El inciso segundo de la misma



disposición agrega: *“Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...”*.

Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

**Quinto:** Que, de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos respectivos.

A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto de que se condenara a la demandada, además de declarar el despido injustificado, al pago de las cotizaciones previsionales y de salud porque no habían sido solucionadas, a lo cual se accedió en la respectiva sentencia.

Conforme a lo razonado, no se observa yerro alguno, pues por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia del vínculo del trabajo, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de acuerdo con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago, de tal modo que al decidirse como se hizo en el pronunciamiento del grado, no se incurrió en la vulneración de las normas jurídicas denunciadas, resultando correcta la decisión de la judicatura de desestimar el recurso de nulidad planteado por la parte demandada, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo.

**Sexto:** Que, conforme a lo razonado, no obstante la verificación de la disimilitud doctrinal entre la sentencia impugnada y las aparejadas al recurso, corresponde rechazar el recurso de unificación planteado, por cuanto el fallo



recurrido contiene la posición jurisprudencial adecuada, no siendo, por lo tanto, necesario uniformar criterio.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada contra la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco.

Regístrese y devuélvase.

N° 1.596-2020.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Teresa de Jesús Letelier R., y los Abogados Integrantes señora Pia Tavorari G., y señor Gonzalo Ruz L. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, doce de octubre de dos mil veintiuno.



En Santiago, a doce de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

